

DECLARATORIA OID
Colombia, septiembre
2021

La pandemia por Covid-19 que ha azotado al mundo durante buena parte de 2020 y 2021 ha dejado en evidencia las desigualdades comunicacionales históricamente denunciadas e ignoradas: falta de acceso a los servicios de comunicación e internet, a la calidad en las emisiones, a los dispositivos, a la alfabetización comunicacional e informacional y a la igualdad por géneros.

Urgen políticas públicas reparatorias y con justicia social para que no sean las situaciones educativas, socioeconómicas o geográficas las que se conviertan en barreras discriminatorias para el ejercicio del derecho humano a la comunicación.

Asimismo, las lógicas de producción mercantilistas han puesto en riesgo a la población a partir de la difusión de información inexacta, desinformación o sobreinformación sin la mirada crítica necesaria ni las metodologías y deontologías periodísticas fundamentales para impedir fenómenos como la Infodemia y las Fake News.

El siglo XXI y sus desafíos comunicacionales y socio políticos requieren de un periodismo profesional, ético y especializado, sobre todo, en derechos humanos, ciencia, educación, niñez y adolescencia, salud, migraciones, discapacidad, política, crimen organizado y medio ambiente.

DERECHOS DE AUDIENCIAS EN LATINOAMÉRICA

ARGENTINA

En cuanto a la situación de la Argentina, resulta auspicioso que se hayan revitalizado los medios públicos, el Enacom y la Defensoría del Público. Sin embargo, no existe legislación alguna sobre plataformas de video e internet, derechos de rectificación y respuesta, publicidad oficial, derechos digitales y derechos de las Audiencias.

Es de celebrar la construcción colectiva del primer Código de Ética de la Televisión Pública, y a su vez de todo el país, pero se considera vital la multiplicación de experiencias en ese sentido y la recuperación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como base fundamental para una comunicación democrática.

Puede reconocerse como un avance la determinación gubernamental de considerar servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, y establecer la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para garantizar a la población el acceso a través de ella a la comunicación, a la educación, al trabajo y a la salud.

Sin embargo, como consecuencia de las políticas neoliberales de 2015 a 2019, se atraviesa la mayor concentración comunicacional de su historia. Aún no se han tomado las medidas urgentes y necesarias para revertirlo.

BRASIL

En Brasil, causa preocupación a la OID la implementación de medidas autocráticas que incluyen el uso de medios públicos para la promoción de gobernantes, condiciones inadecuadas para las/os trabajadoras/es y para la participación de las audiencias, incluyendo a las Defensorías u Ouvidorias, denuncias de acoso en el ambiente profesional y violencia en contra de profesionales de la comunicación.

Tras la llegada al poder en 2019 de un gobierno de ultraderecha, se eliminaron no solo los avances y logros sociales que tanto costó conseguir, sino que además se negó la importancia de la ciencia y se desinvirtió en universidades y centros de investigación. La cultura ha sido fuertemente atacada, al igual que se están desfigurando los organismos contra la discriminación racial y la defensa de la mujer. Por no hablar de acciones del gobierno federal en contra de las vacunas que podrían frenar la pandemia de Covid-19 en el país, contribuyendo a acumular un doloroso balance de casi 600.000 muertes registradas hasta este mes de septiembre.

La proliferación de noticias falsas gana fuerza a través del fomento presidencial de milicias digitales. El Senado brasileño y el Tribunal Supremo (STF) han sido la barrera de contención de los arrebatos golpistas impulsados por el presidente Jair Bolsonaro.

Los mecanismos de transparencia, como la Ley de Acceso a la Información (LAI), instituida durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, han sido lentamente desmantelados. El sistema público de comunicación, inaugurado bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en cumplimiento de un precepto constitucional, está amenazado de extinción, con la intención de privatizar o incluso extinguir a la Empresa Brasil de Comunicação (EBC). El sistema público de radio, la Agência Brasil y TV Brasil están bajo presión permanente para convertirse en un servicio de propaganda gubernamental.

Tras el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, la Ouvidoria (Defensoría de las audiencias) de EBC no ha tenido las condiciones para cumplir su misión. En los últimos dos años, la situación empeoró con restricciones a la publicación de sus informes. Por otro lado, merece ser destacada la movilización de trabajadores/as, organizaciones sociales y académicas/os en defensa de los medios de comunicación públicos, incluyendo el lanzamiento en diciembre de 2020 de la “Ouvidoria Cidadã da EBC”, con informaciones de sus actividades, disponibles en <https://ouvidoriacidadaebc.org>. Iniciativas como ésta deben ser reforzadas y apoyadas por la OID.

En síntesis, lo que se exige es que cesen las amenazas a los medios públicos de comunicación que forman la EBC. Ésta no pertenece al gobierno sino al público y, por lo tanto, a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Brasil.

MÉXICO

En el caso de México, reconocemos el trabajo de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) y su actuación fundamental en la defensa de los derechos de las audiencias. Exhortamos, a que la Sentencia del amparo resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 12 de mayo de 2021, sea cumplida por autoridades, medios de comunicación y actores involucrados, en beneficio de las audiencias, en apego a la Constitución y en cumplimiento, específicamente de sus artículos primero y sexto.

Rechazamos las campañas de desinformación que se difundieron en los meses de mayo y junio en torno a los alcances del referido amparo y en torno a los exdefensores y defensoras de audiencias que directamente lo interpusieron. Asimismo, demandamos que los servicios informativos de los medios de comunicación, en apego al rigor periodístico y la ética, contrasten las versiones y den voz a todos los involucrados.

Es importante enfatizar que el cumplimiento cabal de la sentencia abonará al fortalecimiento de los derechos de las audiencias, a dotarlos claramente de una autoridad garante y establecer prácticas estandarizadas en sus mecanismos de defensa. De no atenderse, estaríamos ante un retroceso en materia de derechos humanos en detrimento de la ciudadanía.

COLOMBIA

El cubrimiento de las manifestaciones sociales en los meses de abril y mayo de 2021 dejó al descubierto una falta de pluralidad informativa, de representación efectiva de las juventudes y un activismo partidario disfrazado de periodismo que vulnera los derechos de las audiencias a una información veraz.

La proximidad de los comicios en el año 2022 presenta un nuevo reto informativo, el cual consiste en brindar elementos de análisis sobre los programas de gobierno, hoja de vida de los candidatos, detalles del origen de su financiación y grupo que los apoya, de tal manera que los ciudadanos tengamos la oportunidad de escoger de manera argumentada a nuestros representantes.

Por otra parte, la radiodifusión en Colombia no cuenta con una legislación tan trabajada en materia de derechos de sus audiencias y cada vez se diluye más en la mirada hacia lo digital.

El reto de las defensorías de audiencias en Colombia y en el resto del mundo es recordar la esencia de los medios de comunicación, la responsabilidad social y el derecho a contar con información solidaria, plural, equitativa, incluyente, respetuosa de los derechos de las audiencias.

Por todo ello:

- ✚ Exhortamos a organismos y autoridades de aplicación de legislaciones del campo de la comunicación, así como a licenciarios, concesionarios y responsables de servicios de comunicación que incorporen Defensorías de las Audiencias, del Público y Ouvidorias para contribuir a la erradicación de la Infodemia y las Fake News.
- ✚ Reclamamos a las autoridades políticas, así como a instituciones, organizaciones sociales y medios de comunicación a que extremen las medidas a su alcance para erradicar los discursos de odio y discriminación por etnia, clase, sexo y géneros, ideologías, estética y creencias religiosas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;
- ✚ Recomendamos la incorporación de periodistas con especialización en Ciencia y capacitación constante a trabajadores de prensa y comunicadores sobre el periodismo y la comunicación de riesgo, así como la inversión en las herramientas y elementos necesarios para poder realizar coberturas responsables de pandemias, epidemias, desastres, catástrofes y emergencias.

- ✚ Las democracias están en riesgo en América Latina si no se estructura la desconcentración comunicacional, la promoción de la diversidad y sostenibilidad de medios universitarios, comunitarios, alternativos y populares y la corregulación de plataformas y nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- ✚ Los derechos digitales deben garantizarse con control y participación ciudadana. A la vez, que los medios de propiedad o gestión estatal deberían tener misiones y funciones de servicio público, garantizándose la independencia editorial con respecto al gobierno de turno.
- ✚ La representación de las juventudes en los medios de comunicación y plataformas digitales de contenidos debe ser plural, activa, incluyente, participativa. No obedecer a estereotipos, ni generalizar puntos de vista como si se tratara de una masa y no de colectivos, con intereses y gustos particulares.

Celebramos la elección de Joseti Marques como nueva presidenta de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, en acto llevado a cabo el día 17 de septiembre de 2021. Joseti es periodista, doctora en Comunicación y Cultura y ex-Defensora de Audiencias de la Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

DECLARAÇÃO OID
Colômbia, Setembro
2021

A pandemia pela Covid-19 que tem arrasado no mundo abarcando um grande período de 2020 e 2021 deixou em evidência as desigualdades comunicacionais historicamente denunciadas e ignoradas: a falta de acesso aos serviços de comunicação e internet, a qualidade nas transmissões, o acesso aos dispositivos, à literacia mediática e informacional, assim como à igualdade pelos gêneros.

São urgentes as políticas públicas reparatórias e com foco na justiça social para que não sejam as condições educativas, socioeconômicas ou geográficas aquelas que se tornem em barreiras discriminatórias para o exercício do direito humano à comunicação.

Além disso, as lógicas mercantis de produção têm colocado no risco à população a partir da propagação de informação inexata, desinformação ou sobreinformação carente do olhar crítico preciso, sem as metodologias nem as deontologias jornalísticas fundamentais para impossibilitarem fenômenos como a Infodemia e as Fake News.

O século XXI com seus desafios comunicacionais e sociopolíticos precisam de um jornalismo profissional, ético além de especializado, sobretudo em direitos humanos, ciência, educação, infância, adolescência, saúde, migrações, deficiência, política, crime organizado e meio ambiente.

DIREITOS DAS AUDIÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA

ARGENTINA

No respeito à situação na Argentina, torna-se auspiciosa a revitalização da mídia pública, o Enacom e a Defensoria del Público. Aliás, não existe legislação nenhuma sobre plataformas de vídeo e internet, os direitos de retificação e réplica, publicidade oficial, direitos digitais e direitos das Audiências.

É motivo de celebração a construção coletiva do primeiro Código de Ética da Televisión Pública e, por tanto, do país inteiro, mas considera-se vital a multiplicação de experiências nesse mesmo sentido, assim também a recuperação plena da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como o suporte fundamental para uma comunicação democrática.

Pode-se reconhecer como um avanço a determinação governamental de considerar como serviços públicos essenciais em competência à telefonia móvel e fixa, Internet e TV restringida e ter estabelecido a Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para garantir à população, através dela, o acesso à comunicação, à educação, ao trabalho e à saúde.

Porém, como consequência das políticas neoliberais de 2015 a 2019, a Argentina atravessa a maior concentração comunicacional da sua história. Ainda não estão conduzindo-se as ações urgentes e necessárias para reverter-lo.

BRASIL

No Brasil, gera preocupação na OID a implementação de medidas autocráticas que implicam o uso da mídia pública para a promoção de governantes, condições inadequadas para as trabalhadoras/es para a participação das audiências, incluindo as Ouvidorias, denúncias de assédio no entorno profissional e violência em contra de profissionais da comunicação.

Após a toma do poder em 2019 de um governo da extrema direita, foram eliminados não apenas os avanços e logros que foram muito difíceis de conseguir, senão que além disso negou-se a importância da ciência e retirou-se o investimento nas universidades e centros de pesquisa. A cultura tem sido fortemente atacada, assim também estão desconfigurando-se os organismos contra a discriminação racial e a defesa da mulher. Isso sem falar das ações do governo federal em contra das vacinas (ou em conta da vacinação) que poderiam mitigar a pandemia da Covid-19 no país, contribuindo na acumulação do doloroso recorde de quase 600.000 mortes registradas até este mês de setembro.

A proliferação das notícias falsas ganha força através do fomento presidencial com as milícias digitais. O Senado brasileiro e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm sido as principais barreiras de contenção dos arrebatamentos golpistas propulsados pelo presidente Jair Bolsonaro.

Os mecanismos de transparência e *accountability*, tais como a Lei de Acesso à Informação (LAI), estabelecida durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, têm sido lentamente desmantelados. O sistema público de

comunicação, inaugurado sob o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cumprimento de um preceito (**mandamento**) constitucional, está ameaçado de ser extinto, com a intenção da privatização ou até extinção da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o sistema público de rádio, a Agência Brasil y TV Brasil estão sob pressão permanente para se tornarem um serviço de propaganda governamental.

Depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a Ouvidoria (Defensoria das audiências) da EBC tem ficado sem as condições para cumprir com sua missão.

Nos últimos dois anos, a situação piorou com as restrições na publicação dos seus relatórios. Por outro lado, merecem um destaque a mobilização de trabalhadoras/es, organizações sociais e acadêmicas na defesa da mídia pública, incluindo o lançamento em dezembro de 2020 da “Ouvidoria Cidadã da EBC”, com informações das suas atividades disponíveis em: <https://ouvidoriacidadaebc.org/>. Iniciativas como essa deverão ser fortalecidas e apoiadas pela OID.

Em síntese, a nossa exigência é pela cessação das ameaças às mídias públicas que conformam a EBC. Ela não pertence ao governo, senão ao público e, portanto, a todos os cidadãos e todas as cidadãs do Brasil.

MÉXICO

No caso do México, reconhecemos a labor da Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) e sua atuação fundamental na defesa dos direitos das audiências. Exortamos a que a sentença do *amicus curiae*, resolvida pela Suprema Corte de Justiça da Nação, o passado 12 de maio de 2021, seja cumprida pelas autoridades, médios de comunicação e atores envolvidos, no benefício das audiências, em cumprimento da Constituição e especificamente, dos artigos primeiro e sexto.

Rejeitamos as campanhas de desinformação que foram propagadas nos meses de maio e junho em torno dos alcances do *amicus curiae* e ao redor dos ex defensores e defensoras das audiências que diretamente interpuseram o recurso. Além disso, demandamos que os serviços informativos da mídia, em cumprimento ao rigor jornalístico e à ética, contrastem as versões dadas e deem voz a todas as pessoas envolvidas.

É importante realçar que o acatamento em plenitude da sentença aprimorará ao fortalecimento do direito das audiências em equipá-las com clareza de uma autoridade garante, assim também em estabelecer práticas standardizadas nos mecanismos para sua defesa. Se não fosse atendida, ficaríamos diante um retrocesso em matéria de direitos humanos e em prejuízo da cidadania.

COLÔMBIA

A cobertura dos protestos e manifestações sociais durante os meses de abril e maio 2021 deixou exposta uma falta de pluralidade informativa, de efetiva representação das juventudes e um ativismo partidário disfarçado como jornalismo que transgrede os direitos das audiências do acesso a uma informação veraz.

A proximidade das eleições no ano 2022 apresenta um novo desafio informativo, o qual é oferecer elementos de análise acerca dos programas de governo, o currículo dos candidatos, os detalhes sobre a origem do orçamento e o grupo que lhes apoia, para que os cidadãos tenhamos a oportunidade de fazer uma escolha argumentada dos nossos representantes.

Pela sua vez, a radiodifusão na Colômbia não tem uma regulação tão aperfeiçoada em matéria dos direitos das suas audiências e se dissolve cada vez mais olhando para o digital.

O desafio das defensorias das audiências na Colômbia e no resto do mundo é lembrar da essência da mídia, a responsabilidade social e o direito a obter informação solidária, plural, equitativa, inclusiva e respeitosa dos direitos das audiências.

Por tudo o anterior:

✚ Exortamos aos organismos e às autoridades responsáveis pela aplicação de legislações no campo da comunicação, tanto quanto licenciatrios, concessionários e responsáveis do serviço da comunicação para incorporarem Defensorias das Audiências, do Público e Ouvidorias para contribuir na erradicação da Infodemia e das Fake News;

✚ Demandamos às autoridades políticas, assim como para às instituições, organizações sociais e a mídia a que empreguem todas as medidas no seu alcance para erradicar os discursos de ódio e discriminação pela etnia, classe, o sexo e os gêneros, ideologias, aparência física e filiações religiosas ou qualquer uma que ataque a dignidade humana e tenha como seu objetivo invalidar ou enfraquecer os direitos e as liberdades das pessoas;

✚ Recomendamos a incorporação de jornalistas com especialização em Ciência e uma formação constante para trabalhadores da imprensa e comunicadores acerca do jornalismo e a comunicação de risco; assim também como o investimento nas ferramentas e elementos necessários para a realização de coberturas responsáveis de pandemias, epidemias, desastres, catástrofes, crises e emergências.

- ✚ As democracias estão sob risco na América Latina se não se estruturasse a desconcentração comunicacional, o fomento e a promoção da diversidade, sustentabilidade da mídia universitária, comunitária, alternativa e popular; assim também a correção das plataformas digitais além das tecnologias da informação e da comunicação.
- ✚ Os direitos digitais devem ser garantidos com controle e participação cidadã, ao mesmo tempo que a mídia pública ou com gestão estatal deverá contar com missões e funções do serviço público da radiodifusão para garantir sua independência editorial do governo em turno.
- ✚ A representatividade das juventudes na mídia e nas plataformas de conteúdos digitais deve ser plural, ativa, inclusiva e participativa. Não se submeter aos estereótipos, não também generalizar perspectivas como se estivessem diante de uma massa e não de coletivos com seus interesses e preferências particulares.

Celebramos a indicação de Joseti Marques como a nova presidenta eleita da Organização Interamericana de Defensoras e Defensores das Audiências, no ato ocorrido o dia 17 de setembro de 2021. Joseti é jornalista, doutora em Comunicação e Cultura e ex-Ouvidora das Audiências da Empresa Brasil de Comunicação EBC.

¹ Disponible en: <https://ouvidoriacidadaebc.org/frente-de-entidades-lanca-ouvidoria-cidada-da-ebc/>